

Constituir la legitimidad

LOS HITOS DE LA CRISIS

La protesta general de los cacerolazos la noche del 10 de marzo reveló que el frustrado golpe militar del 4 de febrero se ubicaba en la misma línea del fantasma abstencionista que protagonizó las elecciones de diciembre de 1989 y del sacudón popular que estremeció Caracas y otras ciudades la noche del 27 de febrero del mismo año.

A partir del Viernes Negro (18/2/84) la situación, que en verdad era insostenible, reventó. La liberación del dólar y otras medidas concomitantes significó el traspaso a manos privadas de una gran parte de la renta petrolera y de las reservas acumuladas. La deuda, contratada en gran medida de un modo irresponsable y aun fraudulento, hipotecó también gran parte de la renta futura. El Estado disponía cada vez menos para redistribuir al pueblo en servicios y subsidios. No sólo no lo hizo sino que RECADI repartió a manos llenas el dinero que quedaba, en un público contubernio entre empresarios y políticos. Para rematarlo todo el paquete neoliberal que le siguió congelaba puestos de trabajo y salarios, liberaba todos los precios y reducía drásticamente las partidas de servicios y, peor aún, acabó con la responsabilidad más elemental hacia los usuarios. El pueblo se ahogaba y reventó. El 27 de febrero el pueblo gritó que no podía más, que no estaba dispuesto a soportar él solo el peso de una crisis que no había desatado. La respuesta del gobierno fue la represión más brutal que recuerda la historia de Venezuela, tan sangrienta como la batalla más sangrienta de toda nuestra historia que tuvo lugar a fin de 1902 en La Victoria. Sólo que aquí no peleaban dos ejércitos aguerridos sino el ejército contra el pueblo desarmado. Fue la acción más bochornosa de la historia de nuestras Fuerzas Armadas. Sin embargo sus cuadros medios aprendieron la lección y expresaron abiertamente a sus mandos superiores que nunca más volverían a reprimir al pueblo, que esa no era su misión sino por el contrario la de velar por su seguridad. No así el flamante ministro de la Defensa que se sintió tan orgulloso de su ejecutoria que hasta pensó aspirar a la Presidencia. Tampoco el gobierno, que inmediatamente organizó una compra masiva de armamentos antimotines, con lo que declaraba que su enemigo era el pueblo pobre, y completó estas medidas con la repartición humillante de becas y otras baratijas desmoralizadoras. La abstención de las elecciones de diciembre de ese año fue un indicio de que ya la gente no quería jugar a ese juego porque no creía en él; eso a pesar de que eran las primeras elecciones directas de gobernadores y alcaldes. Sin embargo tanto el Presidente como los partidos políticos continuaron sus caminos, absolutamente de espaldas al país y sordos a sus reclamos. Eso es lo que más desmoralizó a la ciudadanía de todos los estratos

sociales. Se podía denunciar cualquier cosa, incluso con lujo de detalles, y nunca pasaba nada; se hacían observaciones, se pedían rectificaciones, y como si se hablara a la pared. No se condenó ni a un solo corrupto y no se modificó ni una sola medida. Cuando se dominó el golpe del 4 de febrero la reacción primaria del Presidente y los partidos fue repudio al supuesto magnicidio, defensa de la democracia, identificada con este gobierno y estos partidos, y reafirmación de las medidas. Sólo cuando fue inocultable el apoyo masivo de la gente a las propuestas de los golpistas (incluso a sus mismas personas) y la falta absoluta de apoyo al Presidente y al gobierno y a las instituciones (incluso la rabia porque no les hubieran dado al Presidente y a los demás una lección más amarga) empezó el Presidente a reconocer que la crisis era mucho más seria. Sin embargo todavía no era clara su voluntad de rectificar. El cacerolazo hizo ver que lo que había hecho era absolutamente insuficiente y que la crisis seguía. Después de los discursos del Presidente creemos que la crisis sigue. Y creemos que debe seguir, que es saludable que siga mientras no se subsanen las causas que la provocaron.

LA CRISIS SE DEFINE COMO PERDIDA DE LEGITIMIDAD

Los representados no se sienten expresados en sus representantes. Más radicalmente sienten que ya no son sus representantes. Ante esta evidencia (que el propio Presidente ha reconocido en su discurso del día 12) no vale decir que el pueblo dio un mandato al Presidente y que éste tiene que cumplirlo. El pueblo retiró ese mandato inequívocamente. Tanto a él como a los congresistas. La legitimidad del Presidente y del Congreso no derivan ya de las elecciones pasadas porque se han dado sucesivos plebiscitos que las anularon. Su legitimidad depende únicamente de su desempeño actual, es decir de que hoy oigan al país y esforzándose sinceramente en interpretar sus demandas sean capaces de gerenciarlas con éxito.

FACTORES DE LA CRISIS

1. Impunidad estructural

Esta pérdida de legitimidad obedece a diversos factores. Uno es la impunidad. En todos los regímenes políticos hay corrupción. Nuestro problema es su impunidad absoluta. Hemos llegado a la conclusión de que la impunidad se debe a que la corrupción no es un abuso sino el funcionamiento normal del sistema. No que cada funcionario sea corrupto. Es estructuralmente corrupta la maquinaria estatal. La causa es que está intervenida por

los partidos, bien directamente, bien a través de los gremios controlados por ellos bien a través de los jueces puestos por ellos. La corrupción está en que los puestos decisivos son ocupados por personas cuya credencial es el acatamiento a las directrices del partido y por tanto sus objetivos son poner la institución al servicio del partido. Así no puede funcionar ni el Ministerio de Educación ni los Seguros ni los liceos ni los hospitales ni los tribunales ni las Fuerzas Armadas ni los gremios profesionales o los sindicatos. Todo está desnaturalizado. Esa es la corrupción estructural. De ella se deriva la corrupción en su sentido convencional de favorecer a personas privadas (individuos o empresas) con dineros públicos. Y de ella se deriva la impunidad absoluta de que goza la corrupción. Esa es la fuente radical de la pérdida de legitimidad de los partidos políticos. Eso es lo que ha provocado que decir político sea decir una mala palabra, un insulto, algo que raya. La gente ha llegado a caracterizar al político como alguien que vive del Estado y para lograrlo desnaturaliza al Estado y lo paraliza. Naturalmente que individualmente muchos políticos son honestos. Pero no lo es el funcionamiento de los partidos y ni su función actual en la sociedad.

2. Irresponsabilidad política

Otro factor que contribuye a la pérdida de la legitimidad es la falta absoluta de responsabilidad de los políticos respecto del país. Responsable significa en teoría política que responde de sus actos ante sus representados, que mantiene con ellos una comunicación fluida, de modo que éstos puedan constatar efectivamente que el gobernante (o el partido opositor) cumple con sus mandatos. No solamente no se han arbitrado canales institucionales para validar este carácter constitucional de nuestra democracia sino que no se han tomado en cuenta los canales informales existentes. Más aún, el actual presidente, por ejemplo, una vez elegido puso en marcha un plan que en buena medida contradecía sus promesas de la campaña. La gente ha aprendido que los políticos van donde ellos únicamente en época de elecciones, saben que van para engañarlos, y luego se olvidan de ellos y de sus promesas. El pueblo se fue cargando de resentimiento porque el Presidente le abandonaba y en el exterior hablaba supuestamente en nombre suyo, como el padre de familia que, alegando estar trabajando para el bienestar de su familia, no tiene nunca tiempo para estar con ella. El Presidente, volcado al exterior y rodeado por personas absolutamente desconocedoras del pueblo venezolano, se extrañó de su tierra y se excomulgó de su pueblo. Algo que les pasó ya hace mucho tiempo a las maquinarias de los partidos, atrincheradas en sus bunkers y aisladas en sus cogollos, atentas únicamente a las encuestas de opinión. Esta irresponsabilidad ha provocado en los políticos la pérdida absoluta del sentido de realidad. Por eso en los conductores del Estado y en los congresistas la realidad sólo se hace presente como

emergencia. En los últimos años la administración sólo reacciona ante los conflictos. La gente se harta de que para conseguir la cosa más trivial haya que montar una sampablera. Así no puede funcionar un país. Y así sin embargo están funcionando los sectores de educación y salud, el INOS y todo lo demás. Es decir, así no están funcionando. No puede ser que no se pueda acudir a nadie por vía normal y que haya que armar un bochinche para que algo medio funcione. No es posible resistir mucho tiempo tanta irresponsabilidad, no sólo en la conducción del país en cuanto a sus orientaciones de fondo sino hasta en las cosas más elementales.

3. Conducción económica errada

El tercer factor de la pérdida de legitimidad es la orientación económica del Estado, avalada por los partidos. La gente percibe algo muy elemental: que el Estado recibe por la renta petrolera de 10 a 15 mil millones de dólares cada año, que esa es una suma enorme, que es un dinero que el Estado administra a nombre de todos los venezolanos y que la mayor parte del pueblo no lo ve por ningún lado. Mejor dicho lo ve en el esplendor de los bancos y sus increíbles ganancias, en la suntuosidad de las quintas de lujo, apartamentos y oficinas, en los nuevos carros recién importados, en los viajes a USA duplicados el año pasado... ningún Estado de América Latina recibe esa renta tan enorme; si además cobrara los impuestos como lo hacen los demás estados (ya que ellos son casi su única fuente de ingresos) tendríamos que estar en el más completo estado de bienestar. La gente no se explica cómo en vez de estar así nos encontramos con una tremenda deuda y en una crisis tan profunda que el pueblo y las clases medias y aun los sectores económicos más débiles tengan que ser abandonados a su suerte para poder salir a flote. La gente sabe que a ella le descuentan lo del seguro y sabe que los bancos y las grandes empresas casi no pagan impuestos y que tampoco hay impuesto de lujo y que no se cobra el impuesto a la renta de los que no tienen seguro porque vuelan más alto. La gente sabe que el Estado despilfarra. Al propio Presidente hemos oído decir que para que llegue un bolívar al pueblo por los canales del Estado, éste tienen que gastar 10 porque 9 se quedan por el camino. La gente sabe que se ha estado subsidiando generosamente a empresas maulas y aun fantasmas... Claro que la gente está dispuesta a reducir sus expectativas y a trabajar más duro, ya lo está haciendo, ya está pasando hambre y viviendo a presión en una tensión que se le hace casi insoportable. Pero no está dispuesta a tolerar que reine sin cortapisas un mercado dominado por los grandes donde ellos ganen todo lo que puedan y el pueblo sea entregado sin remisión en manos de los que tienen poder para bajar lo más posible el valor del trabajo y subir lo más posible el de los productos del trabajo. No está dispuesto a aceptar que esa tenga que ser la salida. Admitido por la ciudadanía el valor de la competitividad, es decir de no

sobreproteger ni al aparato productivo ni a los usuarios de servicios, y la necesidad de gerenciar el estado con profesionalismo y pulcritud, el Estado por su parte tendría que aplicar con equidad esos criterios y no continuar sobreprotegiendo la banca, tendría que emprender una reforma a fondo en sus despachos, tendría que emprender una reforma tributaria basada más en los impuestos directos que indirectos, para emparejar las cargas, y además tendría que flexibilizar enormemente su política de modo que obedezca no a teorías ni a modelos abstractos sino a nuestra realidad venezolana, incluida la ventaja de la renta petrolera. La gente no ha visto hasta ahora que el Estado rectifique. Y retira su mandato a estos administradores tan desastrados y tan arrogantes que se creen intérpretes y dueños de lo que es común.

4. Falta de ejemplaridad en los líderes

Es el cuarto factor de la pérdida de legitimidad. La gente tiene la impresión de que los líderes son unos rufianes. Y así quienes debieran ser un espejo en el que se miren los ciudadanos se han convertido para el pueblo en piedra de escándalo. Los líderes llevan décadas corrompiendo al pueblo, socavándole la moral. Se han acostumbrado tanto a la mentira que ya no distinguen la información de la propaganda. Han pervertido radicalmente el sentido de la verdad. La gente tiene la impresión de que la división tajante que sostienen entre la vida pública y privada no es para tener una parcela de tranquilidad y para mantenerse en algún aspecto como ciudadanos particulares y conservar así el sentido de realidad. La gente siente que la privacidad que exigen es para poder llevar una vida doble, para poder mantener oculto lo que no puede publicarse sin desdoro. Pero tampoco su vida pública se mantiene al nivel de los principios que representan. No se trata de casos aislados imputables a debilidad humana, tentada por la seducción del poder. La corrupción es, decíamos, estructural. O están incurso en ella o, teniendo la obligación de denunciarla, la permiten. Por eso sus palabras no tienen peso. Han perdido el respeto que debían a la ciudadanía y ya la ciudadanía no los respeta. Para el pueblo son basura. Este apelativo es muy duro y no cuadra en verdad a muchas individualidades concretas. Pero no es inexacto cuando se aplica a la globalidad.

SALIDAS FALSAS Y CAMINOS DE SOLUCION

Si es cierta esta pérdida global de legitimidad del sistema político eso significa que un problema tan complejo, que ha venido incubándose durante varias décadas y que concierne a las instituciones y a las personas no puede resolverse ni de una vez por todas, ni con la remoción de una persona, ni con la entrada de un líder carismático, ni con una sola medida.

La salida a esta crisis global de legitimidad tendría que llevarse a cabo en dos fases. Ante todo, un cambio de rumbo global, y luego, sobre esa base, un proceso largo en medidas sucesivas que conciernan a cada una de los campos. Ahora bien, para que se logre esa legitimidad es imprescindible el concurso de la mayor parte posible de los ciudadanos, tanto en el cambio de rumbo global como en el diseño y ejecución de las medidas sectoriales.

CONSTITUIR EL ESTADO COMO PODER LEGITIMO

Si el sistema político ha perdido legitimidad significa que el poder político ha vuelto a manos de la ciudadanía. La ciudadanía tiene que volver a constituir los órganos que la representen. La ciudadanía tiene que volver a constituirse en poder político articulado. Esto es lo que significa en puridad una asamblea constituyente.

En nuestro país la mayor parte de las asambleas que se autotitulaban constituyentes fueron mera legitimación de un poder fáctico autoconstituido. Fueron el brazo legal de un caudillo victorioso o de un partido vencedor, en todo caso de una autocracia. Incluso nuestra primera constitución venezolana fue la expresión de la oligarquía criolla que se había emancipado de España, no fue la expresión de todo el pueblo venezolano. El dicho popular "ellos son blancos y se entienden", aplicado a las contiendas partidistas que signaron hasta hoy nuestra vida republicana, explica la base que estuvo detrás de las sucesivas asambleas constituyentes, incluso la de 1864, después de la guerra federal. Por eso sus constituciones expresaron, por una parte el control del grupo criollo y por otra la debilidad de ese poder plasmada en la sumisión al jefe de turno y en la copia servil de modelos foráneos. Las dos únicas constituyentes medio democráticas que hemos tenido (1947 y 1960) de todos modos estuvieron copadas por los partidos que, si representaron con cierta verdad al pueblo, también lo mediatizaron y sustituyeron. Esa limitación, que entonces podría estar justificada como una fase en el proceso de la constitución del pueblo venezolano (es decir de los de abajo) como ciudadanos efectivos, ahora ya no tiene justificación porque de hecho impide que los de abajo puedan ejercer su responsabilidad.

¿COMO CONSTITUIR ESA CONSTITUYENTE?

¿Podemos esperar realísticamente que ocurra en este caso algo distinto? No creemos que de esta posible asamblea pueda salir la constitución definitiva. Si vemos que es posible avanzar un paso más. Para que así sea en la preparación de la asamblea tiene que desencadenarse un proceso de discusión, tanto de sus objetivos como de sus integrantes y el modo de elegirlos, que sea ya realmente constituyente de una voluntad nacional articulada. En los hechos que señalábamos al principio estaba presente un sujeto que se expresaba. La

preparación de la asamblea podría abrir cauces para que se exprese de un modo más preciso y orgánico.

Pero para que esos cauces no mediaticen ni sustituyan a la ciudadanía es imprescindible que los partidos, carentes hoy de legitimidad, no aprovechen este terreno para rehacer sus viejas artimañas. Por eso es fundamental comenzar excluyéndolos como tales de la Constituyente: nominalmente a todos lo que hoy desempeñan cargos, y también como partidos, aunque sus otros miembros puedan participar de ella como ciudadanos que son, si los eligen.

Otro aspecto a tener en cuenta es combinar adecuadamente lo global y lo regional y de todos modos mirar lo global desde lo regional, para evitar tanto las abstracciones como el mero localismo. Para que el proceso a la Constituyente vaya por esos cauces ayudará que en la asamblea más de la mitad de los delegados lo sean por su respectiva entidad estatal.

La preparación de la asamblea tiene que ayudar a constituir sujetos colectivos. Un sujeto colectivo imprescindible tiene que ser la gente popular. En Caracas, por ejemplo, ha empezado a funcionar una asamblea de barrios. Es imprescindible que quienes se reúnen en ella en estos meses se aboquen a tomar efectivamente el poder en los barrios para que sus integrantes no sean el grupo de los notables populares (como los otros) sino que sean legítimos representantes de grupos populares articulados. Sólo si lo logran tendrán sentido su presencia en la Constituyente; únicamente entonces esa presencia será verdaderamente significativa.

Además de ayudar a constituir sujetos colectivos la preparación de la asamblea tiene que servir para que los que actualmente existen desde su función particular se eleven a asumir la globalidad, de modo que no vayan a la asamblea a defender sus propios intereses sino a procurar el bien común desde su perspectiva concreta. Por eso tiene que haber representantes empresariales y laborales, de instituciones educativas y de investigación, sin excluir a las Fuerzas Armadas y a la institución eclesiástica. Ahora bien, todas esas instituciones deberían entablar un proceso no de enrocamiento sino de sinceración, tanto para aclarar sus legítimos intereses como para estudiar cómo pueden componerse con los de la voluntad general, con los del bien común.

También los partidos tienen que entrar en un proceso decisivo. Ellos deberían tener un lugar en el Estado que resulte de la Constituyente. Pero eso dependerá de si son capaces de superar su confinamiento a las maquinarias y su enquistamiento en cogollos y correspondientemente su carácter clientelar y de intermediarios cobradores de peaje. Tendrán sentido permanente si llegan a constituirse en mediadores, es decir como gestores de acuerdos entre poderes reales y gerentes de esos acuerdos.

¿QUEREMOS HACERNOS CARGO?

Un interrogante de fondo es si la sociedad civil, en nuestro caso el pueblo y profesionales y medianos propietarios estarán en verdad interesados en entablar este proceso. Puede ser que muchos prefieran mantenerse en su dimensión privada y entregar el país a otro apoderado que administre con más honradez y eficiencia que los pasados. ¿Se desea de verdad asumir el poder del Estado? O por lo menos ¿nos resignamos a asumirlo cumpliendo una misión que sentimos como deber, como compromiso ineludible? Por ejemplo, los cristianos venezolanos ¿estamos convencidos de que en esta coyuntura asumir la dimensión política de nuestra existencia, con todo lo que ello nos complica la vida, es un deber no sólo de justicia sino de amor cristiano, de caridad, es decir de solidaridad?

Finalmente ¿qué le tocaría al pueblo? Si no está dispuesto a seguir como menor de edad, si no se quiere entregar ciegamente a ningún apoderado, pero si tampoco está capacitado para hacerse cargo del Estado como tal ¿cuál podría ser su tarea concreta en esta oportunidad histórica? Creemos que su actuación podría ir en tres direcciones. Ante todo, llevar él mismo sus intereses inmediatos, es decir hacerse cargo de las asociaciones de vecinos y de los sindicatos, barriendo de ellos a los partidos políticos. En segundo lugar el pueblo puede colaborar con las instituciones en asuntos que le conciernen; por ejemplo en lo que toca a su salud y a su educación y capacitación y a la normalización de servicios en los barrios. Creemos que esto será tanto más posible cuanto las organizaciones populares sean realmente representativas. Aquí tendría lugar un importante protagonismo del pueblo, incluso a nivel de empleos. En tercer lugar el pueblo debería dar su opinión respecto de los problemas globales. El no puede llevarlos profesionalmente; pero sí tiene capacidad para comprender cómo le afectan. Claro está que para que no tenga que opinar con sacudones, abstenciones o cacerías, tendría que arbitrar sus propios cauces, que serían las asambleas de organizaciones barriales.

Si esta Constituyente se constituye a través de un proceso como el señalado, podrá lograr un cambio de rumbo tan significativo que pueda llegar a constituir un Estado renovado y más representativo y eficaz. Si se produce un cambio de rumbo así, tendremos que aguantar severas presiones, bastante sostenidas, tanto de organismos multinacionales como de algunos sectores poderosos del país. Por eso será imprescindible que la voluntad que la constituya pueda mantenerse viva y consciente para conocer su verdadero bien y pagar el costo para acercarse a él.

¿Quién constituirá la Constituyente? El papel histórico que pueden desempeñar hoy tanto el Presidente como los partidos políticos es dar lugar para que sea posible este proceso.